

ECONOMÍA Y TRABAJO

La ministra de Trabajo se reúne hoy con sindicatos y empresarios

M. V. G., Madrid

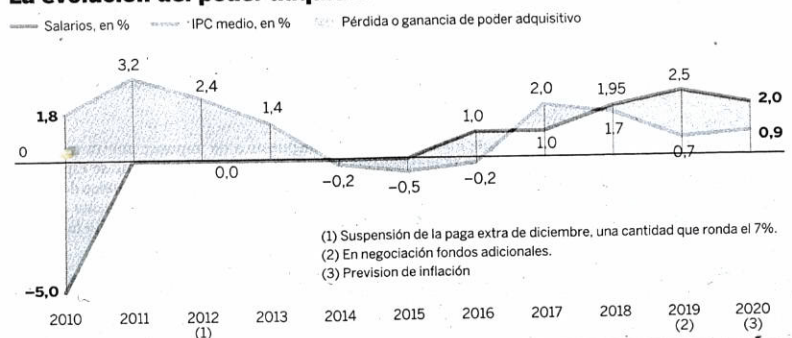
El diálogo social echa a andar oficialmente hoy por la tarde. La nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunirá con los líderes de los sindicatos CC OO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, y con los de las patronales CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva. Esta cita oficial no será el primer encuentro que tenga Díaz con los máximos representantes de los agentes sociales. La ministra cenó el lunes con Garamendi y Cuerva y antes se había visto de forma discreta con Sordo y Álvarez, según ha confirmado EL PAÍS.

Sobre la mesa estarán las materias que el Gobierno de coalición ha situado en un lugar prioritario para sus primeros días: subida del salario mínimo interprofesional y derogación de parte de la reforma laboral. El SMI subió a 900 euros al mes en 2019, un 22,3%. Este importante incremento condiciona ahora el escenario para 2020.

Durante las negociaciones para el pacto de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos acordaron alcanzar durante la legislatura el 60% del salario medio en España. Sin embargo, no se aclaró cuánto iba a subir el primer año. El compromiso fue llevar una propuesta al diálogo social para pactarlo con empresarios y sindicatos. Entre lo que se debe consensuar está la referencia que se toma como salario medio y si esta cantidad sería bruta o neta.

Además, Díaz ha señalado con claridad que quiere derogar rápido el despido de quienes faltan al trabajo ocho días alternos con justificante médico a lo largo de dos meses. Más templada se mostró ayer la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que afirmó que "nunca" se puede derogar toda una reforma laboral.

La evolución del poder adquisitivo de los funcionarios



(1) Suspensión de la paga extra de diciembre, una cantidad que ronda el 7%.
(2) En negociación fondos adicionales.
(3) Previsión de inflación

Fuente: Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sindicatos, INE y elaboración propia

EL PAÍS

Los funcionarios ganarán más de tres puntos de poder adquisitivo en tres años

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid

Los trabajadores públicos disfrutaron en 2019 de una ganancia significativa de poder adquisitivo. Casi dos puntos de avance por la debilidad de los precios y el incremento de salarios. También en 2020 la tendrán si se cumple la previsión de infla-

ción media, un 0,9%, tras el incremento de sueldos del 2% que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Al final, durante los tres años de vigencia del pacto que los sindicatos y el Gobierno del PP alcanzaron en 2018, los funcionarios recuperarán más de tres puntos de poder de compra.

El Consejo de Ministros zanjó ayer otra de las asignaturas pendientes del anterior Gobierno en funciones: la subida del 2% del sueldo de los funcionarios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había comprometido a hacerlo nada más fuera investido, y lo ha hecho a la tercera reunión del nuevo Ejecutivo, como destacó la recién nombrada ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

El decreto ley, que la ministra explicó que debía hacerse como en 2019 porque todavía no hay unos presupuestos aprobados para este año, supondrá un coste adicional para las arcas del estado de 3.212 millones de euros. Según los números que facilitó Darias en la rueda de prensa, la medida beneficiará a más de 2,5 millones de trabajadores públicos. Los sindicatos calculan que



Carolina Darias, ayer después de la reunión del Consejo de Ministros. / ÁLVARO GARCÍA

la cifra puede llegar a más de tres millones.

La discrepancia en el dato procede, probablemente, de la diferente fuente estadística. Si se toman las estadísticas de personal

del registro central de la Administración, las plantillas son más bajas porque no se cuenta a los trabajadores temporales que no llegan a un tiempo mínimo. La cifra crece en cambio si se toman los números de la encuesta de población activa.

La subida del 2% es un paso inicial. El incremento puede ser mayor porque hay un 0,3% más llamado de "fondos adicionales", y que cada Administración negocia cómo se aplica. Más difícil será que se añada la variable dependiente de la marcha del PIB, porque solo se aprobará si la economía española crece este año por encima del 2%, y a la vista de las previsiones económicas, no parece que vaya a alcanzarse ese listón.

Con este escenario provisional, puede concluirse que los trabajadores públicos ganarán poder adquisitivo en 2020 por tercer año

consecutivo. Ya lo habían hecho entre 2014 y 2016, pero entonces se debió a la debilidad de los precios (que cayeron en los tres ejercicios) y no a subidas de sueldos. Ahora, en cambio, hay una combinación de ambas cosas.

Las subidas pactadas en 2018 han permitido que el primer año del pacto el incremento fuera del 1,95%; el segundo, el 2,5% (a falta de aplicar el 0,25% de fondos adicionales), y un 2% este año. Frente a estos aumentos, los precios, aunque más vigorosos que hace años, no han subido tanto: un 1,7% en 2018, un 0,7% en 2019 y un 0,9% previsto para 2020 por Funcas. Estas últimas cifras responden a la inflación media del año y no a la anual de diciembre de un ejercicio. ¿Por qué? Los economistas suelen apuntar que a la hora de medir la evolución del poder adquisitivo es mejor tomar los datos medios, ya que los beneficiarios de los incrementos reciben el sueldo y gastan a lo largo de todo el año y no solo en un mes concreto.

Expuesto esto, se observa que el avance del poder de compra sería de 3,3 puntos durante el trienio. Esto compensaría, en parte, el retroceso de los años más duros de la crisis, en los que se consolidó una pérdida de 14 puntos (en 2010 llegaron a recortarse los salarios un 5% y después las remuneraciones estuvieron congeladas hasta 2016), que llegó a más de un 20% con la suspensión de la paga extra de diciembre en 2012. No obstante, los trabajadores públicos de casi todas las administraciones ya han recuperado esa extra suspendida.

Los tres sindicatos de la función pública (CC OO, CSIF y UGT) aprovecharon ayer para reivindicar su papel. Recordaron, una vez confirmada la decisión del Gobierno, que la subida llega por el cumplimiento del pacto salarial alcanzado en marzo de 2018 con el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. "Era lo que había que esperar", enfatizó el responsable de UGT, Julio Lacuerda. La central de funcionarios, CSIF, recordó la carta que le había remitido el Gobierno garantizando la medida "a la mayor brevedad". Y, por su parte, CC OO señaló que la central "se movilizó desde mucho antes de la constitución del nuevo Ejecutivo para que esta subida salarial fuera garantizada y ejecutada de forma inmediata".

OPINIÓN / JESÚS MOTA

Universo (laboral) de locos

Durante el ejercicio 2019 el mercado laboral español no ha mejorado un ápice. Ni era de esperar, porque la campanada reforma laboral de Mariano Rajoy, incólume hasta hoy y resistente al cambio político de la breve legislatura anterior, ha seguido generando precariedad con la misma regularidad con que las plantas producen clorofila. De hecho, a grandes rasgos la calidad en el empleo ha ido a peor. Por ejemplo, ha disminuido el número de contratos indefinidos, 1,323 millones el año pasado frente a los 1,446 millones de 2018, 123.023 contratos menos. En 2019 tan solo tres de cada 100 contratos iniciales fueron indefi-

nidos a tiempo completo. Los contratos indefinidos, como era de suponer, están en retroceso y no pasará mucho tiempo, si la Reforma Rajoy no se rectifica, hasta que se extingan. La joya del tinglado laboral, tan celebrado por los ideólogos de la CEOE con su presidente Antonio Garamendi al frente, es el contrato temporal a tiempo parcial. Hubo de estos 7,165 millones el año que acaba de terminar, 133.485 más que en 2018.

En muchos aspectos, en casi todos los que importan para el bienestar de los asalariados, el modelo laboral cristalizado por la Reforma Rajoy (esa fue la auténtica Contrarreforma) es absurdo o ridículo o

ambas cosas. A los pensadores de la prédica neoliberal no parece extrañarles que España tenga la tasa de temporalidad más alta de la UE-28; concretamente el doble, el 26,8% aquí frente al 13,8% en Europa. A efectos de temporalidad, España podría ser considerado un país emergente. Tampoco les molesta que para reducir el número de parados en una sola persona sean necesarios 560 contratos iniciales. ¿En qué universo de locos es posible que 1,34 millones de empresas, que emplean a 14,207 millones de trabajadores, registren en un año 21,676 millones de contratos iniciales? ¿A nadie le preocupa la desmesurada rotación laboral del sistema?

Pues bien, esta es la estructura laboral que las organizaciones empresariales, los teóricos del *laissez faire* cañí y los partidos políticos apoltronados en la letanía del "hay que crear empleo", como si todos los empleos fuesen iguales, se nie-

gan a desmontar. La fabricación de puestos precarios es una industria nacional floreciente; y como coincide con salarios irrisorios, porque esa es la lógica del sistema construido para "tiempos de crisis" y que ahora se quiere convertir en permanente, pues miel sobre hojuelas.

El problema no es que subir el Salario Mínimo (SMI) destruya empleo poco cualificado, sino que la excesiva atomización empresarial española y su escasa afición (en general) por mejorar la productividad del capital y de los recursos humanos obligan a que las microcompañías solo puedan vivir si pagan salarios misérrimos e impuestos misérrimos. Si en vez de gimotear por las esquinas contra la rectificación de la Reforma Rajoy, las patronales se dedicaran a mejorar la productividad de sus empresas afiliadas, quizá el empleo en España sería de mejor calidad y las retribuciones garantizarían una vida decente a los salariables.